

EL RECUADRO

Detrás de debates distractivos y decisiones al margen del Diálogo Social sobre la jornada laboral o el salario mínimo interprofesional, se oculta uno de los grandes problemas que afronta nuestra economía y que la política económica y laboral, lejos de contribuir a resolverlo, lo agravan: la productividad.

La coyuntura actual, con el ritmo de actividad cayendo, la inflación todavía en niveles muy altos y la competitividad, en el mejor de los casos, estancada, pone en el centro del debate económico la productividad, un objetivo crucial que debería mantenerse al margen de las batallas ideológicas.

La productividad, la eficiencia con la que se emplean los recursos disponibles, es la clave de la competitividad de una economía y el pilar fundamental para mejorar las rentas y sostener el estado del bienestar.

En España, la productividad del trabajo y del capital, muestran una evolución preocupante que confirma ineficiencias en el aprovechamiento de los recursos y lastra nuestra competitividad.

Según datos del BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la productividad total de los factores en España ha caído en lo que va de siglo un 7,3 por ciento mientras crecía, por ejemplo, en Estados Unidos, Alemania o Francia, a tasas del 15,5, 11,8 y 8,8 por ciento, respectivamente.

España tiene, pues, unos niveles de eficiencia productiva por debajo de los del siglo pasado, y ello a pesar de la acumulación de capital físico y humano que ha registrado nuestra economía en estos años, que ha contribuido a que el PIB crezca sin que haya mejorado su aprovechamiento productivo.

Son muchos los factores que determinan esa evolución, entre ellos la acumulación de capital en sectores como la construcción, los servicios, el turismo o la energía, que han generado inversiones, muchas de ellas inmobiliarias, poco productivas, cuando no simplemente infrutilizadas.

En paralelo, la inversión en España en activos relacionados con las nuevas tecnologías y la innovación cuya capacidad como vectores de impulso a la eficiencia es muy relevante, es inferior a la de otras economías avanzadas, con las que, finalmente, tenemos que competir.

En ese terreno, las carencias en formación son otro de los factores en los que se basa el deterioro de nuestra productividad. La cualificación de los puestos de trabajo es imprescindible para aprovechar las inversiones y mejorar la renta, pero las trabas al desarrollo de los sistemas de formación profesional, ocupacional y continua no están contribuyendo a ello.

Además, nuestra economía sigue sin afrontar las reformas estructurales que se necesitan para racionalizar e impulsar los mercados de bienes y servicios y favorecer una mejor asignación de los recursos.

Las consecuencias de todo ello son la pérdida de competitividad del conjunto de la economía y la caída de la renta per cápita que en 2000 estaba en España un 2,4 por ciento por debajo de la media europea y en 2022, ya tiene un diferencial negativo del 14,4 por ciento.

El gasto público y las políticas fiscales que se aplican para mantenerlo están perjudicando la inversión productiva, y la extensión de sistemas de protección que acercan el esquema de renta mínima, expulsando fuerza laboral del mercado de trabajo y desincentivando la formación, finalmente, aumentan los riesgos de exclusión y reducen las posibilidades de reciclaje profesional.

En los últimos años, frente a las distintas crisis, ha hecho fortuna el mantra político de "no dejar a nadie atrás", pero es evidente que, en los últimos años, es la productividad de nuestra economía la que se está quedando rezagada respecto a las de los países de nuestro entorno.

Favorecer la productividad, sobre la base de invertir eficientemente, racionalizar el gasto, innovar y ofrecer formación de calidad, es la mejor fórmula para asegurar un crecimiento económico del que sean partícipes todos los ciudadanos y para sostener un estado del bienestar que los proteja. Lo contrario, actuar contra la productividad, puede dejarnos a todos atrás.